Señores

**JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRAIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO**

E. S. D.

**RADICADO:** 50001333300720230003500

**MEDIO DE CONTROL:** CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

**DEMANDANTE:** INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAS.

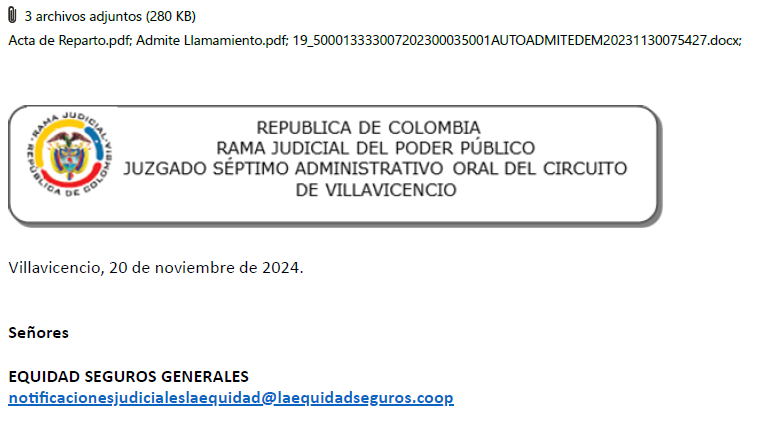
**DEMANDADO:** EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P

**ASUNTO:** CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional número 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderad especial de **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.** tal y como se acredita en el poder anexo, organismo corporativo, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, de manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, manifiesto que comedidamente procedo, en primer lugar, a **CONTESTAR LA DEMANDA** formulada por el **INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAS**, y en segundo lugar, a **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** formulado por la **EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.** anunciando desde ahora que me opongo a las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía, de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

**I.** **OPORTUNIDAD**

Mediante Auto del 05 de agosto de 2024 el despacho resolvió admitir el llamamiento en garantía formulado por Electrovichada S.A. E.S.P. Dicha providencia fue notificada personalmente a mi procurada, por mensaje de datos, el 20 de noviembre de 2024, como se observa:



De conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 255 del CPACA, el término para contestar el llamamiento en garantía es de quince (15) días, plazo que comienza a contabilizarse a los dos (2) días hábiles siguientes a la remisión del correo electrónico (notificación personal). En este sentido, la providencia quedó notificada el 22 de noviembre de 2024 y el término de los quince (15) días para presentar la contestación corrió desde el 25 de noviembre de 2024 hasta el **13 de diciembre de 2024**. Por lo anterior, el presente escrito de contestación se radica dentro de la oportunidad prevista para tal efecto.

**II. SOLICITUD DE DICTAR SENTENCIA ANTICIPADA**

De manera respetuosa, solicito al Despacho proferir sentencia anticipada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. Esta solicitud se fundamenta en que, en el presente caso, se ha configurado la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Al realizar el análisis de los términos de caducidad aplicables, se evidencia que la demanda fue presentada fuera del plazo legal de dos (2) años establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esta circunstancia es determinante, ya que la caducidad implica la improcedencia para reclamar judicialmente, lo que afecta directamente la viabilidad del presente proceso.

En este sentido, el artículo 141 del CPACA establece:

**Artículo 141. Controversias contractuales -** Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. **Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.**

Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.  
  
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes. (Negrilla y subrayado Nuestro)

En este mismo sentido, es necesario hacer referencia a las disposiciones contenidas en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), específicamente en el inciso segundo, numeral V, que aborda el término de caducidad de la acción en casos de controversias contractuales cuando el contrato requiere de liquidación y no ha sido liquidado. La norma mencionada establece lo siguiente:

**Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda -** La demanda deberá ser presentada:

(…)

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:

i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa;

iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta;

iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe;  
  
**v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga.** (Negrilla y subrayado nuestro)

Teniendo en cuenta lo anterior, y a la luz de los artículos 141 y 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), cuando se busca la liquidación judicial de un contrato, como ocurre en el caso *sub-examine*, el término para la caducidad del medio de control debe contarse a partir de la finalización del plazo de cuatro (4) meses que la norma otorga a la administración para llevar a cabo la liquidación del contrato, plazo que no se ha cumplido en esta situación.

En este sentido, a partir de los artículos mencionados, se interpreta que el legislador confiere a la administración la facultad de liquidar el contrato en un plazo de dos (2) meses, contados a partir del vencimiento del plazo previamente convenido por las partes para realizar la liquidación bilateral. En caso de que no exista un acuerdo entre las partes, la norma establece **un término máximo de cuatro (4) meses, contados desde la terminación del contrato** o desde la expedición del acto que ordene la liquidación, para que la administración lleve a cabo la liquidación unilateral.

Así las cosas, tomando en consideración el término máximo contemplado en la norma, que es de cuatro (4) meses, se establece que el contrato terminó el 30 de noviembre de 2019. En consecuencia, el plazo para su liquidación se extendió desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 1 de abril de 2020. A partir del 2 de abril de 2020, comenzó a contabilizarse el término de dos (2) años para la caducidad del presente medio de control. Es relevante señalar que durante el año 2020 se produjo una suspensión de términos debido a la emergencia sanitaria derivada por la pandemia COVID-19.

Esta suspensión tuvo lugar desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, reanudándose los términos a partir del 1 de julio de 2020, lo que equivale a una interrupción total de tres (3) meses y dieciséis (16) días. En consecuencia, el plazo para presentar la demanda o, al menos, la solicitud de conciliación judicial se prorrogó hasta el 17 de julio de 2022. No obstante, según las pruebas aportadas en el expediente, la solicitud de conciliación fue presentada el 9 de septiembre de 2022, es decir, con un retraso de un (1) mes y veintitrés (23) días respecto al término estipulado, lo que confirma que el medio de control ya había caducado, desde la radicación de la solicitud de conciliación.

El extremo activo sostiene que el término de caducidad debe contarse desde el final del plazo de cuatro (4) meses para la liquidación bilateral, el cual, según su interpretación, habría culminado el 29 de marzo de 2020. Además, argumenta que deben sumarse dos (2) meses adicionales correspondientes a la liquidación unilateral, lo que, según su criterio, extendería dicho plazo hasta el 29 de mayo de 2020. A partir de esta fecha, sostiene que debería iniciarse el cómputo del término de dos (2) años para la caducidad, es decir, hasta el 29 de mayo de 2022.

En este mismo sentido, la demandante considera que a esta última fecha debe añadirse la suspensión de términos decretada en el marco de la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia COVID-19. Según su interpretación, dicha suspensión extendería el plazo para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa hasta el 13 de septiembre de 2022.

No obstante, la interpretación del ente demandante es errónea, ya que no se ajusta a lo dispuesto por la normatividad vigente. La caducidad de la acción debe computarse conforme a lo establecido en el artículo 164 del CPACA, sin incluir una acumulación de plazos como lo propone la demandante. En este sentido, la norma no establece que ambos plazos sean acumulativos ni que puedan computarse de manera conjunta. Son plazos distintos, cada uno con una finalidad específica y un límite temporal claro, que no deben confundirse. Así, el término de caducidad de dos (2) años comienza a contabilizarse una vez finalizados esos plazos, conforme lo establece la Ley. Por lo tanto, la interpretación de la demandante carece de fundamento normativo y no se ajusta a lo dispuesto por el CPACA.

Sobre el punto, se precisa que el artículo 182 de la ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la ley 2080 de 2021 dispone lo siguiente:

**ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA.** Se podrá dictar sentencia anticipada: (…) 3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

Por lo anterior, y toda vez que se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 182A del CPACA, solicito a su señoría que se dicte **SENTENCIA ANTICIPADA**, declarando probada la excepción de **CADUCIDAD** del medio de control, aquí propuesta.

**CAPÍTULO I**

**CONTESTACIÓN A LA DEMANDA**

1. **FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

**AL HECHO PRIMERO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el demandante, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

No obstante lo anterior, dentro del plenario se observa la integración del acta CAFAZNI No. 067, que aprueba la celebración del proyecto entre las entidades que formaron parte del mismo.

**AL HECHO SEGUNDO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

No obstante lo anterior, dentro de los documentos aportados con la demanda, y a los cuales se les debe otorgar el valor probatorio correspondiente, se encuentra el oficio No. 2017069732 de fecha 20 de octubre de 2017. Es importante señalar que esta solicitud fue realizada con el conocimiento previo que tenía la entidad accionante sobre la capacidad del contratista para ejecutar proyectos de esta índole.

**AL HECHO TERCERO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

Teniendo en cuenta lo expuesto en este hecho y el oficio No. 2017072288, Electrovichada expresó claramente su voluntad de celebrar el contrato. Esto es relevante dado que la entidad contaba con la experiencia necesaria para llevar a cabo proyectos de esta naturaleza, lo que respaldaba su capacidad para cumplir con los requisitos establecidos para la ejecución del mismo.

**AL HECHO CUARTO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO QUINTO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO SEXTO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

Sin embargo, como se refleja en los documentos presentados por las partes involucradas, el 10 de noviembre de 2017 se firmó el contrato interadministrativo para el suministro e instalación de módulos fotovoltaicos, inversores y elementos de conexión para un sistema solar fotovoltaico aislado con respaldo de baterías. Este proyecto, parte del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas (FAZNI), y tenía como objetivo la energización de viviendas rurales en las veredas del municipio de La Primavera, Vichada.

**AL HECHO SÉPTIMO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

No obstante lo anterior, esta información está claramente reflejada en el contrato y fue aceptada por ambas partes al momento de su firma. Es importante destacar que el contratista cumplió con la entrega de los 325 activos, conforme a lo pactado en los términos del acuerdo y sus modificaciones adicionales.

**AL HECHO OCTAVO:**  A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

No obstante, el contrato interadministrativo estableció que el plazo de ejecución sería hasta el 31 de julio de 2018. Sin embargo, debido a la complejidad del proyecto y con el acuerdo mutuo de ambas partes, se realizaron ampliaciones legales del término inicialmente previsto.

**AL HECHO NOVENO:**  A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

Teniendo en cuenta las afirmaciones de las partes y los documentos aportados, se confirma que el acta de inicio del proyecto fue firmada el 18 de diciembre de 2017. Este documento establece formalmente el inicio de las actividades relacionadas con el contrato, cumpliendo así con los procedimientos previos a la ejecución del proyecto acordado

**AL HECHO DECIMO:**  A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el contrato mencionado, efectivamente, ese fue el valor acordado para el proyecto.

**AL HECHO DECIMO PRIMERO:**  A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que debido a la complejidad del proyecto y con el acuerdo mutuo de ambas partes, se realizaron ampliaciones legales del término inicialmente previsto.

**AL HECHO DECIMO SEGUNDO:**  A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que debido a la complejidad del proyecto y con el acuerdo mutuo de ambas partes, se realizaron ampliaciones legales del término inicialmente previsto.

**AL HECHO DECIMO TERCERO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que debido a la complejidad del proyecto y con el acuerdo mutuo de ambas partes, se realizaron ampliaciones legales del término inicialmente previsto.

**AL HECHO DECIMO CUARTO:**  A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que debido a la complejidad del proyecto y con el acuerdo mutuo de ambas partes, se realizaron ampliaciones legales del término inicialmente previsto.

**AL HECHO DECIMO QUINTO:**  A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

Sin embargo, es cierto que ELECTROVICHADA adquirió una póliza de cumplimiento del contrato, la cual se identifica bajo el No. AAO28476, para respaldar el cumplimiento del acuerdo, incluyendo las modificaciones aprobadas por la GGC, según las pruebas que obran en el expediente.

**AL HECHO DECIMO SEXTO:**  A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO DECIMO SÉPTIMO:**  A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

Se debe resaltar que ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. cumplió con las obligaciones contractuales que el extremo activo señala como incumplidas. Por lo tanto, no es procedente alegar que el contratista incumplió en la ejecución de sus obligaciones contractuales. Más aún cuando hizo la entrega total de los activos.

**AL HECHO DECIMO OCTAVO:**  A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO DECIMO NOVENO:**  A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

Sin embargo como se acredita en el contrato interadministrativo celebrado entre las partes, en efecto el valor del mismo fue de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($6.499.601.875) incluido IVA.

**AL HECHO VIGÉSIMO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO VIGÉSIMO PRIMERO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO VIGÉSIMO SEGUNDO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO VIGÉSIMO TERCERO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO VIGÉSIMO CUARTO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO VIGÉSIMO QUINTO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

Se debe resaltar que ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. cumplió con las obligaciones contractuales que el extremo activo señala como incumplidas. Por lo tanto, no es procedente alegar que el contratista incumplió en la ejecución de sus obligaciones contractuales. Más aún cuando hizo la entrega total de los activos.

**AL HECHO VIGÉSIMO SEXTO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

Se debe resaltar que ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. cumplió con las obligaciones contractuales que el extremo activo señala como incumplidas. Por lo tanto, no es procedente alegar que el contratista incumplió en la ejecución de sus obligaciones contractuales. Más aún cuando hizo la entrega total de los activos.

**AL HECHO VIGÉSIMO SÉPTIMO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO VIGÉSIMO OCTAVO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO VIGÉSIMO NOVENO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO TRIGÉSIMO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO TRIGÉSIMO PRIMERO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO TRIGÉSIMO SEGUNDO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO TRIGÉSIMO TERCERO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO TRIGÉSIMO CUARTO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO TRIGÉSIMO QUINTO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO TRIGÉSIMO SEXTO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO TRIGÉSIMO SÉPTIMO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO TRIGÉSIMO OCTAVO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO TRIGÉSIMO NOVENO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO CUADRAGÉSIMO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO CUADRAGÉSIMO PRIMERO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO CUADRAGÉSIMO TERCERO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO CUADRAGÉSIMO CUARTO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO CUADRAGÉSIMO QUINTO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO CUADRAGÉSIMO SEXTO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

Se debe resaltar que ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. cumplió con las obligaciones contractuales que el extremo activo señala como incumplidas. Por lo tanto, no es procedente alegar que el contratista incumplió en la ejecución de sus obligaciones contractuales. Más aún cuando hizo la entrega total de los activos.

**AL HECHO CUADRAGÉSIMO OCTAVO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

Se debe resaltar que ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. cumplió con las obligaciones contractuales que el extremo activo señala como incumplidas. Por lo tanto, no es procedente alegar que el contratista incumplió en la ejecución de sus obligaciones contractuales. Más aún cuando hizo la entrega total de los activos. Incluso, siempre estuvo presto a que el contrato se cumpliera a cabalidad y que se llevara a feliz término.

**AL HECHO CUADRAGÉSIMO NOVENO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

Se debe resaltar que ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. cumplió con las obligaciones contractuales que el extremo activo señala como incumplidas. Por lo tanto, no es procedente alegar que el contratista incumplió en la ejecución de sus obligaciones contractuales. Más aún cuando hizo la entrega total de los activos. Incluso, siempre estuvo presto a que el contrato se cumpliera a cabalidad y que se llevara a feliz término.

**AL HECHO QUINCUAGÉSIMO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

Se debe resaltar que ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. cumplió con las obligaciones contractuales que el extremo activo señala como incumplidas. Por lo tanto, no es procedente alegar que el contratista incumplió en la ejecución de sus obligaciones contractuales. Más aún cuando hizo la entrega total de los activos. Incluso, siempre estuvo presto a que el contrato se cumpliera a cabalidad y que se llevara a feliz término.

**AL HECHO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO QUINCUAGÉSIMO TERCERO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

**AL HECHO QUINCUAGÉSIMO CUARTO:** A la aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no le consta de manera directa lo señalado por el extremo activo, ya que las circunstancias mencionadas son ajenas a su participación, dado que no es parte del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076. En todo caso, es importante resaltar que corresponde a la parte actora acreditar sus afirmaciones de forma adecuada, utilizando los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

1. **PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES**

**FRENTE A LA PRETENSION PRIMERA: ME OPONGO,** toda vez que, a la fecha de presentación de la demanda, no se evidencia incumplimiento alguno por parte de la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P respecto del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017. Con base en las pruebas que obran en el expediente y en las aportadas con la contestación a la demanda, se demostró que, aunque el contratista pudo enfrentar algunos contratiempos, cumplió con el objeto contractual y entregó los activos previstos en el convenio interadministrativo. Por lo tanto, la declaratoria solicitada carece de fundamento y no resulta procedente en este caso.

**FRENTE A LA PRETENSION SEGUNDA: NO ME OPONGO** a la solicitud, ya que, efectivamente, en este caso, el contrato no fue liquidado de manera bilateral por las partes, ni unilateralmente por la administración. En este sentido, es procedente que el juez lleve a cabo la liquidación judicial del mismo. Sin embargo, al realizar dicha liquidación, el juez deberá evaluar exhaustivamente todos los valores aportados por ambas partes y verificar si existen sumas de dinero pendientes de pago por parte de la entidad demandante en favor del contratista. Esta revisión resulta fundamental para garantizar la adecuada compensación y salvaguardar los intereses económicos de ambas partes, asegurando que no se generen desequilibrios contractuales ni perjuicios financieros.

**FRENTE A LA PRETENSION TERCERA: ME OPONGO,** a las declaraciones y condenas solicitadas en esta pretensión, toda vez que no se han aportado pruebas que demuestren de manera fehaciente un incumplimiento por parte de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. En este caso, el simple señalamiento de un supuesto incumplimiento carece de fundamento probatorio y no es suficiente para acreditar su existencia en el marco del proceso.

Para reclamar la suma pretendida de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($179.347.953,30)**, era necesario acreditar un proceso de liquidación o una evaluación objetiva que determinara de forma precisa el monto adeudado por el supuesto incumplimiento. Sin embargo, la parte demandante no ha demostrado que se haya practicado una liquidación en la cual se evidencie tanto el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista como la relación de dicho incumplimiento con el monto reclamado. En ausencia de esta liquidación, la reclamación carece de sustento probatorio y respaldo técnico y jurídico, lo que la torna improcedente.

**FRENTE A LA PRETENSION CUARTA: ME OPONGO,** toda vez que no se acreditó el supuesto incumplimiento alegado por la parte demandante. En consecuencia, no resulta procedente el pago de la suma que la demandante afirma le adeuda el contratista, y mucho menos la indexación de dicho monto. Adicionalmente, es importante resaltar que la carga de la prueba recae sobre quien alega el incumplimiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. En este caso, la demandante no presentó elementos probatorios suficientes, idóneos y pertinentes que respalden sus afirmaciones. Por lo tanto, cualquier pretensión derivada de este supuesto incumplimiento carece de sustento jurídico y probatorio, lo que hace inviable su reconocimiento en este proceso.

**FRENTE A LA PRETENSION QUINTA: ME OPONGO,** toda vez que no resulta procedente la imposición de costas al contratista demandado. Por el contrario, es procedente condenar en costas a la parte demandante, dado que inició un medio de control de controversias contractuales, cuando respecto del mismo ya había operado el fenómeno de la caducidad, como se explicó en líneas anteriores.

1. **EXCEPCIONES PREVIAS FRENTE A LA DEMANDA**
2. **EN EL PRESENTE CASO OPERÓ LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**

En este caso, la caducidad del medio de control de controversias contractuales operó debido a que la demanda fue presentada fuera del plazo legal de dos años establecido en el artículo 164 del CPACA, el cual venció el 17 de julio de 2022, tras la suspensión de términos por la emergencia sanitaria. Si bien la solicitud de conciliación, que no era necesaria en este caso por ser la parte demandante una entidad estatal, habría suspendido los términos de caducidad, esta fue interpuesta el 9 de septiembre de 2022, excediendo el plazo en un (1) mes y veintitrés (23) días. Por lo tanto, la acción judicial está caducada, como se expondrá en este acápite.

Al realizar el análisis de los términos de caducidad aplicables, se evidencia que la demanda fue presentada por fuera del plazo legal de los dos (2) años establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esta circunstancia es determinante, ya que la caducidad implica la improcedencia para reclamar judicialmente, lo que afecta directamente la viabilidad del presente proceso.

En este sentido, el artículo 141 del CPACA establece:

**Artículo 141. Controversias contractuales -** Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. **Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.**

Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.  
  
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes. (Negrilla y subrayado Nuestro)

En similares términos, es necesario hacer referencia a las disposiciones contenidas en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), específicamente en el inciso segundo, numeral V, que aborda el término de caducidad de la acción en casos de controversias contractuales cuando el contrato requiere de liquidación y no se ha liquidado. La norma mencionada establece lo siguiente:

**Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda -** La demanda deberá ser presentada:

(…)

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:

i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa;

iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta;

iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe;  
  
**v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga.** (Negrilla y subrayado nuestro)

Teniendo en cuenta lo anterior, y a la luz de los artículos 141 y 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), cuando se busca la liquidación judicial de un contrato, como ocurre en el caso *sub-examine*, el término para la caducidad del medio de control debe contabilizarse a partir de la finalización del plazo de cuatro (4) meses que la norma otorga a la administración para llevar a cabo la liquidación unilateral del contrato, plazo que no se ha cumplido en esta situación.

En este sentido, a partir de los artículos mencionados, se interpreta que el legislador confiere a la administración la facultad de liquidar el contrato en un plazo de dos (2) meses, contados a partir del vencimiento del plazo previamente convenido por las partes para realizar la liquidación bilateral. En caso de que no exista un acuerdo entre las partes, la norma establece **un término máximo de cuatro (4) meses, contados desde la terminación del contrato** o desde la expedición del acto que ordene la liquidación, para que la administración lleve a cabo la liquidación unilateral.

Así las cosas, teniendo en cuenta el término máximo contemplado en la norma, que es de cuatro (4) meses, se establece que el contrato terminó el 30 de noviembre de 2019. En consecuencia, el plazo para su liquidación se extendió desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 1 de abril de 2020. A partir del 2 de abril de 2020, comenzó a contabilizarse el término de dos (2) años para la caducidad del medio de control. Es relevante señalar que durante el año 2020 se produjo una suspensión de términos debido a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19.

Esta suspensión tuvo lugar desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, reanudándose los términos a partir del 1 de julio de 2020, lo que equivale a una interrupción total de tres (3) meses y dieciséis (16) días. En consecuencia, el plazo para presentar la demanda o, al menos, la solicitud de conciliación prejudicial se prorrogó hasta el 17 de julio de 2022. No obstante, según las pruebas aportadas en el expediente, la solicitud de conciliación fue presentada el 9 de septiembre de 2022, es decir, con un retraso de un (1) mes y veintitrés (23) días respecto al término estipulado, lo que confirma que el medio de control ya había caducado desde la etapa prejudicial.

La administración sostiene que el término de caducidad debe contarse desde el vencimiento del plazo de los cuatro (4) meses para la liquidación unilateral, el cual, según su interpretación, habría culminado el 29 de marzo de 2020. Además, argumenta que deben sumarse dos (2) meses adicionales correspondientes a la liquidación bilateral, lo que, según su criterio, extendería dicho plazo hasta el 29 de mayo de 2020. A partir de esta fecha, sostiene que debería iniciarse el cómputo del término de dos (2) años para la caducidad, es decir, hasta el 29 de mayo de 2022.

En este mismo sentido, la demandante considera que a esta última fecha debe añadirse la suspensión de términos decretada en el marco de la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia COVID-19. Según su interpretación, dicha suspensión extendería el plazo para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa hasta el 13 de septiembre de 2022.

No obstante, la interpretación de la demandante es errónea, ya que no se ajusta a lo dispuesto por la normatividad vigente. La caducidad de la acción debe computarse conforme a lo establecido en el artículo 164 del CPACA, sin incluir una acumulación de plazos como lo propone la demandante. En este sentido, la norma no establece que ambos plazos sean acumulativos ni que puedan computarse de manera conjunta. Son plazos distintos, cada uno con una finalidad específica y un límite temporal claro, que no deben confundirse. Así, el término de caducidad de dos (2) años comienza a contarse una vez finalizados esos plazos, conforme lo establece la ley. Por lo tanto, la interpretación de la demandante carece de fundamento normativo y no se ajusta a lo dispuesto por el CPACA, y en razón a ello, deberá declararse probada la presente excepción previa y/o mixta de caducidad del medio de control, conforme a los hitos temporales antes expuestos y a la argumentación jurídica que la edifica.

1. **EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA**
2. **INEXISTENCIA DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE ELECTROVICHADA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017.**

En este caso, el incumplimiento alegado por la demandante se fundamenta en aspectos relacionados con la ejecución parcial de actividades del cronograma, la falta de soportes para la liquidación del contrato, una gestión incompleta de recursos, la no autorización de pagos pendientes y la entrega parcial de sistemas fotovoltaicos e informes fuera de término. No obstante, gran parte de estas obligaciones fueron cumplidas, aunque con retrasos o ajustes, lo que evidencia que no se configuró un incumplimiento esencial del contrato que afectara su objeto principal, sino que se trató de contratiempos administrativos y operativos propios de un proyecto de esta magnitud, los cuales no justifican las pretensiones de la parte contratante.

Es fundamental tener en cuenta que uno de los principales objetivos de la contratación estatal es la adquisición de bienes o servicios que satisfagan las necesidades del Estado y de la sociedad en general. Así, en caso de declararse o perseguirse el incumplimiento de un contrato estatal, el propósito debe ser resarcir los daños o perjuicios derivados de dicho incumplimiento, o imponer sanciones que aseguren el cumplimiento íntegro del objeto contractual. En este sentido, el Consejo de Estado ha señalado:

Las sanciones contractuales no tienen como objeto lograr ventajas y ganancias para una de las partes y erogaciones y mayor onerosidad para la otra. Mediante las sanciones lo que se busca es lograr el cumplimiento y obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios sufridos. **Donde no hay perjuicios, no pueden existir sanciones.[[1]](#footnote-1)**

La jurisprudencia sobre sanciones contractuales establece que el fin de las mismas no es generar ventajas para una de las partes ni imponer cargas innecesarias a la otra. El propósito primordial de las sanciones es asegurar el cumplimiento del contrato y, en su caso, reparar los perjuicios causados por el incumplimiento. Las sanciones solo deben aplicarse si existen daños reales y directos derivados del incumplimiento, y no deben ser utilizadas como una herramienta punitiva sin justificación alguna.

En el caso de Electrovichada, no existe evidencia sólida que respalde el incumplimiento alegado por la parte demandante. Electrovichada cumplió con el objeto contractual, realizando las entregas de los activos fotovoltaicos y tomando las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento del contrato. A pesar de los hurtos ocurridos tras la instalación de los paneles solares, hechos ajenos a su responsabilidad, la empresa contratista saneó las irregularidades. Por lo tanto, dado que no se han demostrado perjuicios directos para el Ministerio de Minas o el IPSE, la imposición de sanciones contractuales como el incumplimiento del contrato y la aplicación de la cláusula penal pecuniaria (proporcional) carecerían de fundamento, ya que no se evidencia daño alguno que justifique su aplicación.

Por otro lado, las demoras en la fase de entrega del proyecto no pueden ser atribuidas a un error de Electrovichada, sino a una inadecuada gestión por parte de las entidades encargadas de la supervisión, como el Ministerio de Minas, el IPSE y el Municipio de La Primavera. Tal como lo reconoce el extremo activo en los hechos de la demanda, las entidades no tenían claridad sobre cuál era el ente estatal responsable del cuidado y mantenimiento del proyecto, lo que generó los retrasos y dificultades en la ejecución del contrato. En este sentido, el Consejo de Estado ha establecido lo siguiente:

**Se estará en presencia de un incumplimiento si la prestación no se satisface** en la forma y en la oportunidad debida y si además esa insatisfacción es imputable al deudor. (…) Y es que si la insatisfacción no es atribuible al deudor, ha de hablarse de “no cumplimiento y esta situación, por regla general, no da lugar a la responsabilidad civil. (…) **El incumplimiento, entendido como la inejecución por parte del deudor de las prestaciones a su cargo por causas que le son imputables a él, puede dar lugar al deber de indemnizar perjuicios si es que esa inejecución le ha causado un daño al acreedor**.

**RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL - Por incumplimiento de obligaciones en el contrato estatal**. - Si se tiene en cuenta que la responsabilidad derivada del contrato persigue la indemnización de los perjuicios causados, como ya se dijo, y que en la responsabilidad contractual el deudor debe estar en mora pues de lo contrario no puede reclamar la indemnización de perjuicios ni la cláusula penal en su caso, tal como lo pregonan los artículos 1594 y 1615 del Código Civil, es conclusión obligada que si alguno de los contratantes ha incumplido el otro no estará en mora, pues así lo dispone el artículo 1609 del Código Civil, y por consiguiente el incumplido no puede reclamar perjuicios o la pena.

De esta forma, huelga resaltar que el contrato interadministrativo se ejecutó conforme a lo pactado, cumpliendo con el objeto contractual y las obligaciones del contratista. A pesar de las dificultades y los retrasos relacionados con la validación de los usuarios sustitutos, no es posible atribuir el incumplimiento a Electrovichada. La empresa cumplió con sus responsabilidades contractuales, entregó los activos fotovoltaicos según lo acordado y gestionó los trámites administrativos necesarios. Así pues, no se configuró un incumplimiento que le resulte imputable, por lo que no es procedente la responsabilidad contractual pretendida.

Por otro lado, resulta improcedente la pretensión pecuniaria presentada por la parte demandante, derivada del presunto incumplimiento, ya que la responsabilidad contractual solo surge cuando el contratista incurre en mora, es decir, cuando no cumple con sus obligaciones dentro de los plazos y condiciones estipulados. En este caso, Electrovichada cumplió con las entregas y gestionó las soluciones necesarias. Los retrasos en la validación de los usuarios fueron atribuibles a fallas administrativas de las entidades involucradas. Por lo tanto, no existió incumplimiento ni mora que justifique la indemnización de perjuicios o la aplicación de sanciones.

1. **EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO - INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 POR PARTE DE LA IPSE Y EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.**

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del IPSE y el Ministerio de Minas y Energía en el contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 debe ser examinado desde su responsabilidad en los procesos de contratación, ejecución y supervisión del contrato. A pesar de los esfuerzos realizados por el contratista, Electrovichada, en cumplir con las entregas y reposiciones, los retrasos en la validación de usuarios fueron consecuencia de fallas administrativas y una falta de claridad en las competencias de las entidades responsables, lo que imposibilitó, en gran medida, que el contratista cumpliera con sus obligaciones, de acuerdo con el cronograma estipulado.

La falta de planeación adecuada por parte del Ministerio de Minas y Energía, sumada a la deficiente organización en los acuerdos entre las entidades encargadas, fue la principal causa de los retrasos en la entrega del proyecto. Esta deficiencia organizativa no puede ser atribuida al contratista, Electrovichada, quien cumplió con sus obligaciones de entrega y reposición de activos. Los retrasos se originaron en una ausencia de coordinación clara y efectiva entre las entidades supervisoras del contrato, lo que provocó que las entregas no se realizaran dentro del término pactado. La mencionada falta de planeación de la administración se relaciona estrechamente con la excepción de contrato no cumplido por su parte. El Consejo de Estado ha aclarado que procede esta figura exonerativa de responsabilidad en los contratos estatales aun cuando esta debe ser armonizada con las normas de derecho público y, por tanto, tienen que cumplirse ciertas características para que se configure. De este modo, afirmó lo siguiente:

El artículo 1609 del Código Civil prevé que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Norma que, además de regular la mora en los contratos bilaterales, que descansa en el aforismo con arreglo al cual “la mora de uno purga la mora del otro”, consagra la *exceptio non adimpleti* contractus, medio de defensa que puede invocar una de las partes del contrato cuando no ha cumplido porque la otra tampoco lo ha hecho, caso en el cual su conducta no es tomada como antijurídica. (…) Sin embargo, la jurisprudencia tiene determinado que esta institución en materia de contratos estatales debe ser armonizada con las reglas del derecho público. La *exceptio non adimpleticontractus* tiene lugar únicamente en aquellos contratos sinalagmáticos en que el incumplimiento imputable a la entidad pública sea grave, serio, determinante, trascendente y de gran significación, de manera que sitúe al contratista en una razonable imposibilidad de cumplir sus obligaciones, siendo en ese caso procedente que éste la pueda alegar y suspender el cumplimiento de sus obligaciones.

En este sentido, los retrasos ocasionados por la falta de una adecuada planificación y organización por parte del Ministerio de Minas y Energía afectaron directamente la entrega de los activos, ya que la entrega de los mismos dependía de una correcta validación y de la coordinación entre las distintas entidades involucradas. Estos retrasos no solo impidieron la ejecución oportuna del proyecto, sino que también pudieron haber puesto en riesgo la integridad de los activos, lo que, en última instancia, no puede ser imputado al contratista Electrovichada, quien cumplió con sus obligaciones dentro de los plazos establecidos.

En pronunciamiento más reciente, esta Corporación adujo:

En materia de contratación estatal no cualquier desatención obligacional de la entidad tiene la virtualidad de situar en estado de incumplimiento al contratista o de conjurarlo. Ello obedece a que, en atención al fin público que se encuentra ínsito en la suscripción de un contrato estatal, el contratista debe procurar satisfacer su objeto en las condiciones inicialmente convenidas, a menos que, en realidad, el apartamiento de las obligaciones a cargo de la entidad lo lleven a un estado de imposibilidad material de cumplirlo, supuesto que en este caso no acaeció9 Como se aprecia, para que se predique la excepción de contrato no cumplido en materia estatal, el incumplimiento de la entidad debe ser grave, determinante y trascendente, al punto de situar al contratista en una razonable imposibilidad de cumplir con sus obligaciones.

Así pues, conforme a la jurisprudencia traída a colación, es claro que para que un contratista sea considerado en incumplimiento, deben existir fallas graves y determinantes de su parte, sin que medie una imposibilidad material para cumplir con sus obligaciones contractuales, por parte de la entidad contratante y/o de la supervisión. En este caso, aunque hubo retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, estas no fueron causadas por error u omisión del contratista, quien cumplió con el objeto contractual en su totalidad. Las dilaciones en los procesos de entrega son estrictamente imputables a las entidades estatales que participaron en el contrato interadministrativo, pues con su actuar contribuyeron de manera directa en los retrasos de las entregas del proyecto y en el levantamiento de las actas correspondientes.

Por tanto, al estar imposibilitado el contratista para cumplir en término oportuno con sus actividades contractuales, por acciones estrictamente imputables a la entidad demandante y a quien hizo las veces de supervisor del contrato, deberá declararse probada esta excepción y de esta forma exonerarse de cualquier responsabilidad a ELECTROVICHADA, pues quién incumplió primero el contrato y dio paso a que el contratista incurriera en un aparente incumplimiento, fue el extremo activo de la Litis.

1. **INSUFICIENCIA PROBATORIA PARA ACREDITAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.**

En el caso analizado, se evidencia la falta de una prueba técnica independiente y objetiva que sustente el presunto incumplimiento contractual. Este vacío probatorio debilita la pretensión, pues la normativa exige que el incumplimiento se demuestre mediante evidencias verificables y provenientes de una fuente imparcial, ajena a los intereses de las partes involucradas en el litigio. Tal exigencia es indispensable para garantizar la transparencia y la credibilidad de las pruebas presentadas en el proceso.

En este caso, las pruebas presentadas por la parte demandante, al provenir exclusivamente de sus propias evaluaciones internas, carecen de la imparcialidad necesaria para fundamentar objetivamente el presunto incumplimiento. Esto pone en entredicho su capacidad para garantizar un análisis técnico neutral, dado que su posición como interesada puede influir en la valoración de los hechos. Una prueba técnica imparcial, usualmente rendida por un perito designado o una entidad acreditada sin relación con las partes, tendría la capacidad de verificar con precisión el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas. Al no haberse aportado una evaluación de estas características, no existe un soporte jurídico suficiente para calificar el accionar del contratista como contrario a lo establecido en el contrato.

En este contexto, resulta evidente que las pruebas aportadas no satisfacen el estándar legal para demostrar el presunto incumplimiento contractual. La ausencia de evidencia técnica independiente y objetiva refuerza la procedencia de esta excepción, al tiempo que evidencia la falta de fundamento en las pretensiones de la parte demandante. Esto no solo desvirtúa la existencia de un incumplimiento válido, sino que también subraya la necesidad de que las pruebas cumplan con criterios de imparcialidad para respaldar cualquier reclamación en un proceso judicial.

1. **IMPOSIBILIDAD DE ATRIBUIRLE EL INCUMPLIMIENTO A ELECTROVIVCAH S.A.E.S.P. POR HABER EXISTIDO UNA CAUSA EXTRAÑA QUE AFECTÓ EL CUMPLIMEINTO DE LA OBLIGACIÓN EN EL TIEMPO PACTADO.**

En el presente caso, el supuesto incumplimiento no puede ser imputado a ELECTROVICHADA S.A.E.S.P., ya que se produjo debido a factores externos a su control, como el hurto de bienes necesarios para la ejecución del contrato. Este hecho constituye una causa extraña que afecta la ejecución contractual en el tiempo pactado, amparada en las figuras de la fuerza mayor, el caso fortuito y el hecho de un tercero indeterminado. Estas circunstancias eximen al contratista de responsabilidad en virtud de la ausencia de culpa imputable.

Estos factores, reconocidos por la ley como eximentes de responsabilidad, destacan que cuando un contratista enfrenta situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de un tercero indeterminado, queda exento de responsabilidad contractual, ya que dichas circunstancias son imprevisibles, irresistibles y ajenas a su control. En este caso, el hurto sufrido interrumpió la ejecución contractual sin ser atribuible al contratista. Además, su conducta diligente para mitigar los efectos del hecho, adoptando medidas para retomar las actividades, evidencia su compromiso y refuerza la improcedencia de las pretensiones de la parte demandante. En este sentido el Consejo de Estado ha establecido que:

En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido lo siguiente: “En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo ⎯pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (artículo 64 del Código Civil) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados⎯.

Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina: «La imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida»11. En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual "no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia"12, toda vez que “[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación"13, entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño sólo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que éste deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto. Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil14 y la, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual “[I]imprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”[[2]](#footnote-2)

En este sentido, la jurisprudencia señala que, para que se configure una causa extraña, es necesario que el evento sea irresistible, lo cual se cumple con el hurto, ya que no había forma de evitarlo ni controlarlo. La imprevisibilidad también se cumple, dado que el contratista no podía anticipar la ocurrencia de un hurto en un contexto que escapa a su control. Además, el hurto es un hecho externo al contratista, totalmente ajeno a su actividad contractual, y por lo tanto, no le es imputable. Estos factores eximen de responsabilidad al contratista, pues la ocurrencia del hurto fue algo fuera de su alcance, sin que pudiera haber hecho nada para evitarlo.

En este contexto, es fundamental recordar que nadie está obligado a lo imposible. El hurto, al ser un acto dependiente exclusivamente de la voluntad de un tercero, se presenta como un factor totalmente imprevisible y ajeno al control del contratista. Dado que el hurto no depende de ninguna acción del contratista ni puede ser anticipado de manera razonable, resulta imposible para él prever en qué momento podría ocurrir este evento.

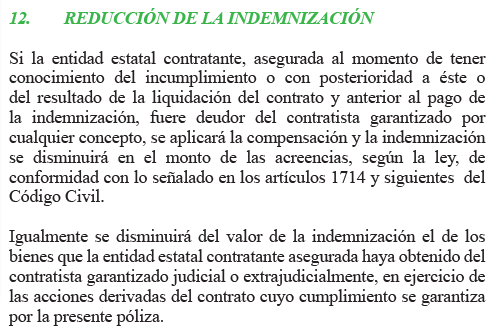
1. **COMPENSACIÓN DE PLENO DERECHO COMO MECANISMO DE EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES-EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA.**

La compensación es un mecanismo jurídico mediante el cual se extinguen simultáneamente las obligaciones existentes entre dos personas que, de forma recíproca, son acreedoras y deudoras. Este modo de extinción opera hasta la misma cuantía de las deudas, evitando pagos cruzados y simplificando las relaciones jurídicas. El artículo 1714 del Código Civil regula esta figura y establece que, cuando ambas partes se deben mutuamente, la compensación opera en los términos y casos previstos por la Ley, extinguiendo ambas deudas de manera automática y equitativa. Del mismo modo, el articulo 1715 de la misma norma indica:

**ARTICULO 1715. OPERACIÓN DE LA COMPENSACIÓN** - La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes: 1.) Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. 2.) Que ambas deudas sean líquidas; y 3.) Que ambas sean actualmente exigibles. Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación; pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

La compensación es una de las formas de extinguir obligaciones reconocida en los ámbitos civil, administrativo y comercial. En el caso de la IPSE, el Ministerio de Minas y Energía y el contratista, esta figura puede aplicarse para saldar obligaciones recíprocas entre las partes del contrato, particularmente cuando el contratista puede demostrar saldos a su favor. Estos saldos podrían utilizarse para compensar cualquier eventual perjuicio que surja de la relación contractual.

De cierto se tiene la existencia de saldos a favor del contratista, tal como lo reconoce la parte demandante en el hecho 54 de la demanda, por tanto, sí estos saldos llegaren a cubrir el monto de la cláusula penal pecuniaria que hipotéticamente se llegare a estimar, la compañía aseguradora que represento se relevaría de cualquier obligación indemnizatoria, a cargo de la Póliza de Cumplimiento AA028476, en virtud de la aplicación de la figura de la compensación de las obligaciones, la cual opera por ministerio de la Ley. Ahora bien, solo en el evento de que los saldos existentes a favor del contratista no llegaren a cubrir el monto de la cláusula penal pecuniaria, existiría una obligación residual de la compañía aseguradora de responder proporcionalmente, pues en este hipotético escenario, de todas formas, deberá reducirse la indemnización en favor de la aseguradora, ya que mi procurada solo estará obligada a responder, respecto del monto que directamente y por su cuenta el contratista afianzado (ELECTROVICHADA) no pudiera cubrir con los saldos que existan a su favor, tal como quedó pactado en la cláusula No. 12 del condicionado general de la Póliza. Miremos:



En los anteriores términos, solicito declarar probada esta excepción.

1. **GENÉRICA O INNOMINADA**

Solicito al señor Juez decretar cualquier otra excepción de fondo que resulte probada en el curso del proceso y que pueda corroborar que no existe obligación alguna a cargo del extremo pasivo de la *Litis*. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso.

**CAPITULO II**

**CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR ELECTROVICAHADA S.A. ESP**

1. **FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

Entre La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo y la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento de Vichada, Electrovichada S.A. ESP, se suscribió un contrato de seguro respaldado por la póliza de cumplimiento estatal N° AA028476, la cual garantiza el cumplimiento del contrato No. 523, cuyo objeto es el suministro e instalación de módulos fotovoltaicos. Esta garantía fue debidamente aprobada por el Ministerio de Minas y Energía mediante acta del 4 de diciembre de 2019, y tiene como asegurado a la IPSE.

En el escrito de llamamiento en garantía, ELECTROVICHADA solicita hacer efectiva la garantía de cumplimiento vinculada al contrato. Dicha solicitud está sujeta a un análisis jurídico detallado y a la evaluación de las coberturas estipuladas en la póliza. Aunque existe un contrato de seguro entre las partes, para que el interés asegurado sea efectivo, deben cumplirse ciertas condiciones específicas, las cuales serán objeto de análisis, junto con las excepciones propuestas en el marco del contrato de seguro.

1. **OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

En relación con las pretensiones del llamamiento en garantía, manifiesto mi oposición a que se atribuya responsabilidad a la compañía de seguros que represento. Esto se fundamenta en que no se configuró el riesgo asegurado, ya que no hubo incumplimiento por parte del contratista, **Electrovichada**. Al no existir evidencia que justifique la aplicación de la póliza ni de los amparos previstos en el contrato de seguro, no corresponde hacerlos efectivos en este caso.

Aunado a lo anterior, solicito al despacho que, al analizar la relación sustancial entre mi representada y el llamante, se consideren los límites y coberturas acordadas, las condiciones particulares y generales de la póliza, y las disposiciones que rigen el contrato de seguro. Igualmente, debe evaluarse si los hechos exceden el ámbito amparado por la póliza, si no se ha demostrado la materialización del riesgo asegurado, o si concurre alguna causal de exclusión que limite o impida la cobertura material.

1. **EXCEPCIONES FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**
   * + 1. **NO EXISTE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE LA EQUDIAD SEGUROS O.C., TODA VEZ QUE NO SE HA REALIZADO EL RIESGO ASEGURADO EN LA** **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL N° AA028476.**

En este caso, se evidencia la inexistencia del siniestro que permita activar el amparo contenido en la **Póliza de Cumplimiento Estatal N° AA028476**, ya que la parte actora no logró demostrar la existencia de un incumplimiento por parte del contratista ni que dicho incumplimiento hubiera ocasionado un perjuicio susceptible de ser cubierto por la póliza. La carga de la prueba recae sobre quien afirma la ocurrencia del siniestro, y en este caso no se aportaron elementos suficientes que acrediten las condiciones para hacer efectiva la garantía asegurada.

La ejecución del contrato suscrito entre las partes cumplió con el objeto contractual establecido, consistente en el **suministro e instalación de módulos fotovoltaicos, inversores y elementos de conexión para sistemas solares fotovoltaicos aislados con respaldo de baterías**, destinados al proyecto de energización de viviendas rurales en diversas veredas del municipio de Primavera, departamento del Vichada. Durante el desarrollo del contrato, el contratista garantizó el cumplimiento de las obligaciones, así como la entrega de los activos comprometidos, demostrando diligencia y compromiso con el propósito pactado.

En consonancia con lo anterior, el artículo 1072 del Código de Comercio define como siniestro:

“**ARTÍCULO 1072. DEFINICIÓN DE SINIESTRO**. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado”.

Por su parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha abordado la definición de siniestro, conforme a lo establecido en el artículo 1072 del Código de Comercio, el cual señala que se denomina siniestro a la realización del riesgo asegurado. Esta definición implica que el siniestro ocurre cuando se materializa el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización activa la obligación del asegurador de cumplir con lo pactado en el contrato de seguro.

En cuanto a la Garantía Única de Cumplimiento en favor de entidades estatales, el Consejo de Estado ha reconocido la potestad de las entidades públicas para declarar el siniestro, es decir, la realización del riesgo asegurado, previa expedición de un acto administrativo debidamente motivado que declare la existencia de dicho siniestro:

Es así como, se reiteró una vez más que las entidades estatales no están obligadas a acudir al juez del contrato para que declare los siniestros, ya que gozan de potestad para hacerlo unilateralmente. Para el caso concreto, el art. 68 CCA., contemplaba, para la fecha de los hechos, este privilegio administrativo. En tal sentido, no tiene razón el apelante al discrepar de la decisión del tribunal. Incluso, la jurisprudencia se ha referido al término con que cuenta la administración para declararlo, luego de la ocurrencia del hecho que lo origina.

**En los anteriores términos, la Sala reiterará la tesis consolidada hasta ahora, en el sentido de que las entidades públicas pueden declarar el siniestro de las pólizas de seguros constituidas a su favor. Incluso pueden -mejor sería decir que deben-, cuantificar el perjuicio, para determinar qué monto asegurado es el que debe pagar la compañía de seguros y/o el contratista. En realidad, lo que acontece con las garantías constituidas en favor de las entidades estatales es que se invierte el procedimiento de reclamación contemplado en el Código de Comercio, pues al paso que en éste el beneficiario y/o el asegurado debe acudir ante la compañía de seguros para acreditarle la ocurrencia del siniestro y el daño -con su monto-, cuando la entidad estatal es la beneficiaria de una póliza es a la compañía de seguros a quien le corresponde acudir ante el Estado –debido proceso- a defender su posición frente a cada uno de los aspectos que involucra la declaración del siniestro, que ya no depende del reconocimiento voluntario que haga la compañía, sino que pasa a manos de la administración decidir si se presentó o no hecho cubierto con la garantía**.[[3]](#footnote-3) (Negrilla y subrayado nuestro)

En atención a lo señalado por la parte demandante, para completar las 325 soluciones individuales de sistemas fotovoltaicos (SISFV) previstas en el contrato, fue necesario subsanar un hallazgo relacionado con 17 activos no recibidos. ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. gestionó la reposición de dichas soluciones energéticas y envió soportes para validar a los usuarios sustitutos mediante varios radicados: 20211330071292 (20 de octubre de 2021), 20221330001282 (11 de enero de 2022) y 20221330021292 (1 de abril de 2022). Finalmente, el 6 de abril de 2022, mediante el oficio No. 20221520007061, se confirmó la validación de los 17 usuarios sustitutos.

Así las cosas, no ha surgido la obligación condicional a cargo de mi representada, puesto que la ejecución del contrato suscrito entre las partes cumplió plenamente con el objeto contractual establecido. Dicho objeto consistía en el suministro e instalación de módulos fotovoltaicos, inversores y elementos de conexión para sistemas solares fotovoltaicos aislados con respaldo de baterías, destinados al proyecto de energización de viviendas rurales en varias veredas del municipio de Primavera, Vichada. Durante el desarrollo del contrato, se evidenció por parte del contratista diligencia y compromiso, asegurando tanto el cumplimiento de las obligaciones como la entrega de los activos comprometidos.

Por lo expuesto, no se configura la realización del riesgo asegurado en la póliza y, en tal medida, deberá declararse probada la presente excepción.

* + - 1. **LÍMITE DE COBERTURA: IMPOSIBILIDAD DE EXCEDER EL VALOR ASEGURADO EN LA** **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL N° AA028476.**

En el remoto e improbable evento en que el despacho considere que sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.** en virtud de la póliza vinculada; exclusivamente bajo esa hipótesis, el juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta que la limitación de responsabilidad va hasta la concurrencia de la suma asegurada:

**ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA**. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074.

La norma antes expuesta es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, **el valor de la prestación a cargo de la aseguradora**, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, **se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado**, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización”[[4]](#footnote-4) (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción del riesgo asumido. Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la aseguradora corresponde a la suma asegurada individual indicado en la Póliza, así:



Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al honorable despacho tomar en consideración que, **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.** no puede ser condenada por un mayor valor que el expresamente establecido en la póliza ante referida. En todo caso, dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

Por lo anterior, ruego declarar probada la presente excepción.

* + - 1. **CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS.**

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado. Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización. Es decir, no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio establece lo siguiente:

**Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento.** La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Conforme a lo expuesto, y teniendo en cuenta las pretensiones formuladas en el petitum de la demanda, resulta evidente que estas presentan serias inconsistencias al no cumplir con los presupuestos esenciales que fundamentan una responsabilidad contractual válida. Reconocer el pago de suma alguna con cargo a la póliza de seguro implicaría transgredir el carácter estrictamente indemnizatorio de los contratos de seguro, desvirtuando su finalidad jurídica. En el caso concreto, no se ha acreditado la ocurrencia de un siniestro ni un perjuicio real imputable al contratista, lo cual conllevaría a suplir indebidamente la carga probatoria de la parte actora. Esto no solo afectaría la naturaleza del contrato de seguro, sino que podría conducir a un enriquecimiento injustificado de la parte demandante.

En conclusión, no puede perderse de vista que los contratos de seguro no pueden ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiende a un carácter meramente indemnizatorio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la indebida solicitud y tasación de perjuicios, se deberá declarar probada la presente excepción y así evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y un correlativo enriquecimiento sin justa causa en cabeza de la parte actora.

# INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MI MANDANTE Y LOS DEMÁS DEMANDADOS-INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SEGURO.

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Es fundamental destacar que la obligación de mi representada, **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.**, encuentra su origen en un contrato de seguro celebrado bajo parámetros y límites definidos por la autonomía de la voluntad privada. Por lo tanto, deben distinguirse dos responsabilidades diferentes: en primer lugar, la del contratista afianzado, derivada de la responsabilidad contractual que se le pretende imputar por un supuesto incumplimiento; cuya fuente de obligación indemnizatoria emana de la ley aplicable al contrato principal y no directamente del contrato de seguro. En segundo lugar, la de mí representada aseguradora cuyas obligaciones no emanan de la ley propiamente dicha, sino de la existencia de un contrato de seguro celebrado dentro de los parámetros dados por los artículos 1036 del Código de Comercio y S.S., encontrándose las obligaciones de mí representada debidamente delimitadas por las condiciones pactadas en el contrato de seguro celebrado, constituyéndose entonces las obligaciones del contratista afianzado y de la aseguradora en obligaciones independientes y que no son solidarias.

La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y mediante ponencia del Dr. Ariel Salazar Ramírez en sentencia SC20950-2017 Radicación N° 05001-31-03-005-2008- 00497-01 ha indicado que:

(…) Por último, **la compañía aseguradora no está llamada a responder de forma solidaria por la condena impuesta, sino atendiendo que «el deber de indemnizar se deriva de una relación contractual**, que favoreció la acción directa por parte del demandante en los términos del artículo 1134 del C. de Co (…) (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Entendido lo anterior, es preciso indicar que la solidaridad de las obligaciones en Colombia solo se origina por pacto que expresamente la convenga entre los contrayentes, lo anterior según el art. 1568 del Código Civil Colombiano que reza:

(…) **En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda**, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.

Pero **en virtud de la convención**, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum.

**La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley**. (…)

En virtud de tal independencia en las obligaciones, se formula esta excepción por cuanto el artículo 1044 del Código de Comercio faculta a la aseguradora proponer al tercero beneficiario las excepciones y exclusiones que pudiere interponerle al asegurado o tomador del contrato de seguro, motivo por el cual puede alegar mí representada la ausencia de cobertura ante la falta de prueba de la ocurrencia y cuantía del siniestro y las exclusiones y demás condiciones que resultaren atribuibles al presente evento.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado.

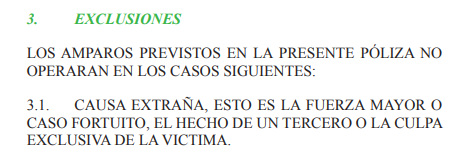
* + - 1. **IMPROCEDENCIA DE HACER EFECTIVO EL AMPARO CONTENIDO EN LA POLIZA No. AA028476 POR HABERSE CONFIGURADO LAS EXCLUSIONES CONTENIDAS EN EL CONDICIONADO GENERAL.**

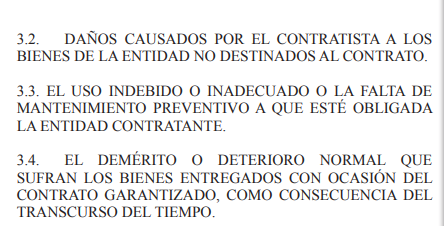
Dentro de las condiciones de la póliza de seguro de cumplimiento No. **AA028476,** expedida por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. se establecieron los parámetros que enmarcan la obligación condicional que esta entidad aseguradora contrajo, en consecuencia, delimitan la extensión del riesgo que asumió. Dentro de estas condiciones, y atendiendo al ejercicio de la autonomía de la voluntad que impera en las relaciones jurídico-negociales derivadas del contrato de seguro, se pactaron una serie de exclusiones a la cobertura que, al configurarse exoneran de obligación indemnizatoria al asegurador. En efecto, el artículo 1056 del Código de Comercio establece que el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume, de modo que la concertación de las aludidas causales de exclusión de cobertura tiene sustento en el citado precepto normativo, que dispone:

Artículo 1056. Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado.

En virtud de la aludida facultad, mi procurada decidió otorgar determinados amparos, supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, e incorporó en la póliza determinadas restricciones o limitaciones que eximen al asegurador a la prestación señalada en el contrato, las cuales se conocen generalmente, como se dijo, como exclusiones de la cobertura.

En el caso concreto, dentro de la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. **AA028476,** se pactaron las siguientes causales de exclusión de cobertura:





En este caso, se debe argumentar que la póliza en cuestión no presta cobertura debido a que se configuran las exclusiones establecidas en el contrato de seguro. La cláusula mencionada en el documento establece que no serán cubiertos los eventos derivados de causa extraña, como lo son la fuerza mayor o el caso fortuito, así como los hechos provocados por terceros o la culpa exclusiva de la víctima. Dado que el hurto fue un acto dependiente de la voluntad de un tercero, se encuentra claramente excluido del amparo de la póliza, al tratarse de un hecho ajeno a la responsabilidad del contratista.

Del mismo modo, las exclusiones estipuladas en el contrato no cubren los daños derivados de situaciones que no son directamente atribuibles a la responsabilidad del contratista. En este caso, se configuran dos exclusiones relevantes que limitan la cobertura de la póliza. La primera es la **exclusión por uso indebido o inadecuado** (punto 3.3), en la que los retrasos en la entrega del proyecto y la falta de mantenimiento preventivo impidieron que se realizaran los mantenimientos necesarios a los activos, lo que contribuyó al deterioro de los mismos. Esta circunstancia queda fuera de la cobertura de la póliza.

La segunda es la **exclusión por deterioro normal** (punto 3.4), que establece que los efectos derivados del transcurso del tiempo, sumados a los retrasos, tampoco están cubiertos. La póliza no ampara el deterioro de los bienes entregados como consecuencia de su uso prolongado sin el mantenimiento adecuado. Por lo tanto, según las condiciones estipuladas en estos puntos, la póliza no ofrece cobertura material frente a estos daños, excluyendo la responsabilidad del contratista.

* + - 1. **DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO**

Sin que con el planteamiento de esta excepción se esté aceptando responsabilidad alguna por parte de mi representada, es pertinente manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado de una póliza se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos, dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que, si para la fecha de la sentencia y ante una condena, se ha agotado totalmente el valor asegurado, no habrá lugar a obligación indemnizatoria por parte de mi prohijada.

* + - 1. **PAGO POR REEMBOLSO**

Sin que el planteamiento de esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada, se solicita al honorable juez que, en el remotísimo caso de encontrar responsable al contratista afianzado y de llegar a establecer que ha surgido alguna obligación resarcitoria en cabeza de la aseguradora, respetuosamente se manifiesta que la obligación de mi representada deberá imponerse por reembolso y no por pago directo a la parte demandante, ya que es el tomador del seguro en este caso quien debe decidir si afecta o no el seguro, quedándole la opción de realizar el pago directo de la hipotética condena en favor del extremo activo de la Litis.

* + - 1. **GENÉRICA O INNOMINADA**

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, frente a la demanda, que se origine en la Ley o en el contrato de seguro con el que se convocó a mi procurada, incluida la de caducidad y prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio. Lo anterior, con fundamento en el artículo 282 del Código General del Proceso.

**CAPÍITULO VII**

**MEDIOS DE PRUEBA**

Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:

**DOCUMENTALES:**

* Copia de la Póliza de Cumplimiento Estatal N° AA028476**,** junto con su condicionado particular y general.
* Petición dirigida al IPSE – Ministerio de Minas y Energía para que certifique si a la fecha existen o no saldos a favor del contratista (ELECTROVICHADA), en virtud del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076.

**TESTIMONIALES**

Con el fin de ampliar la información sobre los informes presentados y las actividades realizadas por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., solicito que se decrete la comparecencia del **SEÑOR NELSON MARÍN RAMOS CUADROS**, quien fue designado como supervisor del contrato mediante oficio del 17 de agosto de 2022. Su testimonio es crucial para esclarecer aspectos específicos relacionados con el cumplimiento del contrato y las acciones ejecutadas, lo que permitirá contar con elementos más precisos para el análisis de los hechos y la resolución del caso.

El testigo podrá ser citado a través de la parte demandante, IPSE, o mediante el Ministerio de Minas y Energía, ya que, en el momento en que ocurrieron los hechos, ocupaba el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 21 en la mencionada entidad. En consecuencia, la citación deberá realizarse a las siguientes direcciones:

1. Al Ministerio de Minas y Energía en la calle 43 # 57 – 31 el CAN en la ciudad de Bogotá D.C. correo electrónico [notijudiciales@minenergia.gov.co](mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)
2. IPSE, en la Calle 99 No. 9A-54 Torre 3 Piso 14 Edificio Street 100, Bogotá D.C. Correo Electrónico: [ipse@ipse.gov.co](mailto:ipse@ipse.gov.co)

Por lo expuesto, y considerando que esta prueba es necesaria, pertinente y conducente para el esclarecimiento de los hechos, solicito que se decrete la comparecencia del señor Nelson Marín Ramos Cuadros.

**DE OFICIO**

Solicito al despacho que oficie a la IPSE y al Ministerio de Minas y Energía, para que dé respuesta a la petición consistente en la certificación de la existencia de saldos o no a favor ELECTROVICHADA, en virtud de la ejecución del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523-IPSE 076. La solicitud debe ser remitida a los siguientes datos de notificación de la entidad mencionados por la accionante en su escrito de la demanda:

1. Al Ministerio de Minas y Energía en la calle 43 # 57 – 31 el CAN en la ciudad de Bogotá D.C. correo electrónico [notijudiciales@minenergia.gov.co](mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)
2. IPSE, en la Calle 99 No. 9A-54 Torre 3 Piso 14 Edificio Street 100, Bogotá D.C. Correo Electrónico: [ipse@ipse.gov.co](mailto:ipse@ipse.gov.co)

**CAPÍTULO VIII:**

**ANEXOS**

1. Pruebas relacionadas en el acápite de pruebas.
2. Poder para actuar
3. Certificado de existencia y representación legal de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.

**CAPITULO IX:**

**NOTIFICACIONES**

Mi poderdante y el suscrito recibiremos notificaciones en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, oficina 212 de la ciudad de Cali (Valle), o en la dirección electrónica: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Del Señor Juez,

Texto, Pizarra

Descripción generada automáticamente

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

C.C. No 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

1. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE LA HOZ Bogotá, D. C, trece (13) de abril de dos mil once (2011) Radicación número: 25000-23-26-000-1998-03040-01(18878) [↑](#footnote-ref-1)
2. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCION A Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011). Radicación número: 66001-23-31-000-1998-00409-01(19067) [↑](#footnote-ref-2)
3. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. (2010, junio 23). Radicación número: 25000-23-26-000- 1995-00862-01(16494). Consejero ponente: Enrique Gil Botero. Actor: Hernán Duarte Esguerra y otro. Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-. Bogotá, D. C. [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 5952. Diciembre 14 de 2001. [↑](#footnote-ref-4)